

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY



Facultad de
Psicología
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Trabajo Final de Grado

Del sujeto clasificado a la agencia relacional: Una lectura crítica de las tecnologías de gobierno en el Programa Cercanías-ETAF

Estudiante. Alexis Mallarini

Tutor: Prof. Adj. Dr. Daniel Fagundez D'Anello

Revisora: Prof. Adj. Dra. Verónica Blanco Latierro

Montevideo, Uruguay

2026

ÍNDICE

1. La escena fundacional y la codificación de la vida

2. Estrangulamiento material y la clínica de la implicación

3. La trinchera metodológica y el surgimiento de la agencia relacional

4. Arquitectura de la investigación y dimensiones de análisis

5. Estructura y recorrido del trabajo

CAPÍTULO 1: Genealogía de la orientación selectiva y la desafiliación sistémica

1.1. Uruguay y la matriz universalista-estratificada

1.2. El quiebre neoliberal y la captura de los supernumerarios

1.3. La crisis de 2002 y la fractura biopolítica de la infancia

1.4. La creación del MIDES y la automatización del desamparo

CAPÍTULO 2: Racionalidades de gobierno, infancia y la clínica de la implicación

2.1. La matriz biopolítica y las tecnologías de gobierno

2.2. Infancia, derechos y la falsa protección

2.3. La clínica de la implicación

2.4. La autoetnografía como contra-saber metodológico

2.5. La agencia relacional y la potencia del colectivo

CAPÍTULO 3: La maquinaria del programa Cercanías-ETAF: de la condicionalidad algorítmica a la vigilancia tutelar

3.1. Orígenes y diseño institucional

3.2. El espejismo intersectorial y la condicionalidad de la supervivencia

3.3. Tecnologías de clasificación y encierro biográfico

3.4. El repliegue hacia el INAU y el giro tutelar

3.5. La estandarización cromática frente a la trinchera narrativa

CAPÍTULO 4. El ejercicio territorial en Treinta y Tres: autoetnografía, implicación y la fuga del colectivo Inter-ETAF

4.1. El antagonismo geográfico y el resguardo narrativo: la oralidad en la intemperie

4.2. La externalización del riesgo y la corporalidad como baluarte: el Estado extorsionador

4.3. El sabotaje táctico en el espacio doméstico: la agencia frente al monitoreo centralizado

4.4. La cancelación del encuentro y la fuga instituyente: el contra-saber del colectivo Inter-ETAF

Conclusiones

Bibliografía

1. La escena fundacional y la codificación de la vida

Lunes, 8 a. m. El equipo territorial se reúne alrededor de la mesa de la oficina. Las hojas A4 circulan de mano en mano, organizando fragmentos de biografías en filas y columnas de Excel. Cada derivación ya atravesó filtros burocráticos y casilleros de clasificación antes de llegar al territorio. Una compañera operadora social lee en voz alta el formulario: "Familia en extrema vulnerabilidad socioeconómica, con puntaje 7".

En esta escena cotidiana (nuestra escena fundacional), la maquinaria burocrática del Estado ingresa a la vida de las poblaciones empobrecidas, transformando trayectorias marcadas por el desempleo zafral y el deterioro del hábitat en celdas de Excel. Mediante el Índice de Carencias Críticas (ICC) y las variables binarias de la plataforma informática Q-Flow, se preconfigura la identidad del sujeto antes del encuentro físico, fabricando una categoría estadística de vulnerabilidad que clasifica a la familia previo al cruce del portón. Esta lógica instituye una racionalidad biopolítica que utiliza sistemas de registro para una fiscalización a distancia, donde el Estado, al fragmentar el padecimiento humano en indicadores de riesgo, consolida el "gobierno de conductas" (Foucault, 2006).

2. Estrangulamiento material y la clínica de la implicación

La intervención del dispositivo gubernamental en el territorio consolida un cortocircuito evidente frente a la "desmaterialización de la política asistencial" (González Laurino y Leopold Costábile, 2014). El Estado exige a las familias empobrecidas construir proyectos de vida autónomos y

modificar sus pautas de convivencia, retirando simultáneamente la provisión de soluciones habitacionales tangibles, avalando la exclusión del mercado de empleo formal y negando el acceso efectivo a la red de servicios públicos y de salud comunitaria. La institucionalidad central sustituye la reparación estructural por el estricto modelaje conductual de los hogares. El diseño de la política pública delega la resolución de la escasez en el esfuerzo individual de las poblaciones excluidas, instaurando el mandato de la resiliencia en un contexto de estrangulamiento material absoluto.

Frente a este vaciamiento gubernamental, el técnico de proximidad encarna la figura de una bisagra tensionada que absorbe el impacto de las contradicciones institucionales. El profesional asume la exigencia física y emocional de demandar transformaciones biográficas en escenarios carentes de recursos, convirtiendo su propio cuerpo en el territorio donde colisionan las directrices del monitoreo centralizado de Montevideo y la realidad descarnada de Vergara y Charqueada (localidades de la ciudad de Treinta y Tres).

Este profundo desgaste ético-político trasciende el agotamiento laboral y confirma empíricamente "las dimensiones epistemológicas, ideológico-sociales y libidinales que ligan inevitablemente el cuerpo y la práctica del trabajador a la institución" (Kaminsky, 1994, pp. 37-38). El operador social asimila en su práctica cotidiana la carga de legitimar una intervención estatal carente de sustento material, desencadenando una fricción constante en la primera línea de la política pública.

3. La trinchera metodológica y el surgimiento de la agencia relacional

La autoetnografía asume la posición de método ineludible para desarmar esta vigilancia institucional (Ellis, Adams y Bochner, 2019). Frente a la cuantificación de las bases de datos, el equipo ETAF de Treinta y Tres (compuesto por cinco técnicos y operadores sociales que realizan la intervención territorial organizados en duplas para asegurar un acompañamiento de proximidad)

instituye una micro-agencia: defienden el Cuaderno de Campo como una trinchera narrativa inexpugnable. El resguardo minucioso de la memoria viva frena el efecto bucle (Hacking, 1995) impuesto por el Estado y certifica mediante el registro cualitativo que "la definición del sujeto es el resultado de un proceso constante e inacabado, en donde intervienen una serie de elementos heterogéneos" (Fagundez-D'Anello y González-García, 2018, p. 995).

En paralelo a esta desobediencia metodológica local, la carencia de recursos tangibles, la precarización laboral y la profunda orfandad de lineamientos técnicos impulsaron una reorganización a escala macro-política. El padecimiento cotidiano de los operadores sociales frente a la intemperie material consolidó el resurgimiento del colectivo Inter-ETAF a nivel nacional. Los trabajadores territoriales transformaron la fricción de los barrios en una fuerza colectiva, conformando un contra-saber estructurado para visibilizar la desprotección de los equipos y disputar directamente el diseño de la política pública dictaminado desde Montevideo.

La articulación de estas dos fuerzas (la resistencia ética en el espacio privado de las familias y el estallido organizativo de colectivo a nivel nacional) demuestra empíricamente que "la capacidad de actuar, la agencia, es por tanto la posibilidad de escapar a la norma para tratar de fundar otra regla" (Ema López, 2004, p. 19).

4. Arquitectura de la investigación y dimensiones de análisis

La presente autoetnografía problematiza la intervención gubernamental a través de tres interrogantes vertebrales. En primer lugar, indagamos qué tipo de sujeto produce y legitima el Programa Cercanías-ETAF mediante sus instrumentos de clasificación y sus mutaciones de registro técnico. En segundo lugar, analizamos cómo operan y se tensionan las nociones de riesgo, vulnerabilidad y autonomía frente a la desmaterialización de la política social. Finalmente,

examinamos de qué modos la fricción entre el trabajador territorial y las familias destinatarias genera espacios de agencia relacional y habitabilidades alternativas al diseño institucional.

Para responder a estas interrogantes, el documento se estructura atravesando tres dimensiones exactas de la práctica en la Obra Social San Martín: la Sujeción y el Espejismo MIDES (2012-2020), la Tensión, Desmaterialización y el Repliegue INAU (2021), y la Fuga y Agencia Relacional frente a la estandarización del Semáforo DRIVE (2025).

5. Estructura y recorrido del trabajo.

Con el fin de ordenar el avance analítico, este documento se estructura en cuatro capítulos que articulan las dimensiones macro-institucionales, los debates teóricos, la anatomía de los registros de gestión y la experiencia encarnada en el territorio de Treinta y Tres (2019-2026).

El **Capítulo 1** traza la genealogía de las políticas sociales focalizadas en el contexto nacional. Este bloque detalla la transición desde la matriz universalista-estratificada hacia la consolidación de tecnologías focalizadas sobre la pobreza extrema. El texto examina las continuidades de la herencia tutelar sobre las infancias y la instauración de un gobierno a distancia orientado a administrar la exclusión.

El **Capítulo 2** funda el andamiaje teórico-metodológico de la investigación. Aquí se articula la analítica de la gubernamentalidad y la conducción poblacional con la validación de la autoetnografía y la clínica de la implicación. Este cruce de saberes funciona como la herramienta epistemológica para desarmar la idea del técnico neutral y legitimar el cuerpo del trabajador territorial como archivo político.

El **Capítulo 3** diseccionа la maquinaria interna del dispositivo Cercanías-ETAF y sus mutaciones tecnológicas. El apartado expone el tránsito desde la cuantificación algorítmica y la captura de la intimidad en la era del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) hacia la vigilancia punitiva bajo la órbita exclusiva del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Aquí demostraremos cómo el uso del software SIPI, la imposición de la ficha cromática del Semáforo DRIVE y la exigencia judicial de acortar la vida de las familias a un breve "En suma" funcionan directamente como tecnologías de borramiento biográfico.

Finalmente, el **Capítulo 4** aterriza en la ciudad de Treinta y Tres para analizar las escenas de la práctica situada. Este bloque final evidencia el choque frontal entre los tiempos burocráticos y las tácticas de supervivencia de los hogares. El cierre corona la investigación exponiendo el salto político desde el padecimiento individual hacia la consolidación del colectivo Inter-ETAF, instituyendo un contra-saber nacional estructurado para disputar el monitoreo centralizado de Montevideo.

Finalmente, el recorrido de este trabajo no busca ofrecer una descripción estática del programa, sino documentar la tensión política que emerge de la práctica situada, concluyendo que la agencia relacional (lejos de ser un atributo individual) es el motor que permite a los trabajadores y a las familias desbordar las grietas del control algorítmico.

CAPÍTULO 1: Genealogía de la orientación selectiva y la desafiliación sistémica

1.1. Uruguay y la matriz universalista-estratificada: de la sociedad salarial a la exclusión crónica

Históricamente, el Estado uruguayo de principios del siglo XX construyó su arquitectura de protección social vinculando el acceso a derechos básicos directamente a la inserción en el mercado de empleo formal. Este diseño institucional consolidó una "sociedad salarial" y legitimó la figura del

"ciudadano trabajador" (Grassi, 2003). En aquel entonces, el trabajo regulado se instituyó como la vía primordial de reconocimiento social, garantizando una red de seguridades colectivas que amortiguaba las incertidumbres económicas para quienes lograban integrarse a las dinámicas de la formalidad.

No obstante, esta matriz de bienestar encarnó un "universalismo estratificado" (Filgueira, 1998), pues el Estado distribuyó las protecciones de forma fuertemente jerárquica. Los empleados públicos y obreros industriales sindicalizados conquistaron los beneficios más robustos, fragmentando la equidad de la asistencia gubernamental. Así, la política pública creó ciudadanos de primera y segunda categoría desde sus cimientos, condicionando la ciudadanía social a trayectorias laborales específicas y al poder de presión de cada gremio.

Aquel modelo de integración naturalizó exclusiones de base severas, marginando sistemáticamente a las familias del medio rural, trabajadores informales y mujeres relegadas al trabajo reproductivo (Antía et al., 2013). Esta marginación originaria constituye el sustento material de la pobreza crónica actual en Treinta y Tres. Las mujeres que el modelo salarial invisibilizó a principios del siglo pasado son, genealógicamente, las abuelas de quienes hoy el entramado Cercanías codifica y responsabiliza por la gestión de la miseria.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, la contracción del mercado de empleo desencadenó una "crisis de incorporación" (Filgueira, 2013), ensanchando las fracturas históricas. El nuevo orden productivo consolidó la desafiliación de miles de familias que absorbieron las consecuencias de un Estado fragmentado. El ahogo material derivado de esta expulsión conforma al sujeto biográfico sobre el cual interviene hoy el trabajador territorial, interactuando con poblaciones que "ocupan literalmente en la sociedad un lugar de supernumerarios" (Castel, 1997, p. 271).

1.2. El quiebre neoliberal y la captura de los supernumerarios: el abordaje focalizado como tecnología de gobierno

Paralelamente a esta fractura, la década de 1990 marcó una transformación de fondo profunda en el escenario nacional y regional. El ajuste macroeconómico desmanteló progresivamente las garantías de seguridad colectiva y mercantilizó los derechos sociales fundamentales (Bell Lara y López, 2002). El mercado de empleo, históricamente cimentado como el gran integrador uruguayo, expulsó fuerza de trabajo de forma masiva, consolidando la inestabilidad laboral como una constante en la vida de los hogares. Frente a esta fractura, la precariedad se instituyó directamente como una tecnología de dominación diseñada para administrar y regular la vida de las poblaciones (Lorey, 2016). El Estado transformó la inestabilidad en la norma cotidiana, configurando el gobierno de la precariedad como un mecanismo explícito de control sobre quienes quedaron a la intemperie material.

En este nuevo escenario, el aparato gubernamental mutó su racionalidad y adoptó el mandato de la auto-responsabilización. El diseño institucional comenzó a exigir a los sujetos empobrecidos que gestionaran su propia supervivencia frente a un mercado desregulado. El Estado ejerce así un "gobierno a distancia" (Rose, 1999), delegando las consecuencias del vaciamiento de la política social en el esfuerzo puramente individual. Esta maniobra ideológica y técnica traduce la desigualdad de base y la carencia de recursos tangibles en un supuesto déficit personal o moral de las familias, privatizando la culpa del fracaso económico de carácter sistémico.

Para sostener esta nueva arquitectura, la política social uruguaya abandonó el paradigma del universalismo y adoptó la priorización selectiva como su herramienta principal de abordaje sobre los sectores de indigencia. Esta decisión gubernamental trasciende la simple administración técnica de presupuestos escasos; conforma un mecanismo político diseñado milimétricamente para gestionar,

clasificar y vigilar de forma selectiva a las poblaciones inmersas en la pobreza extrema (Midaglia, 2000, 2009). El diseño de la intervención transformó la asistencia histórica en una prestación residual y condicionada, estratificando el acceso a los bienes públicos y consolidando un trato diferencial exclusivo para quienes demuestran caer por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.

La burocracia inventó la "vulnerabilidad" como umbral estadístico exacto. Este filtro prepara el terreno biopolítico para el control algorítmico, garantizando que los programas territoriales reciban familias ya parametrizadas bajo criterios que se profundizarán al analizar la arquitectura del ICC en el siguiente capítulo.

1.3. La crisis de 2002 y la fractura biopolítica de la infancia: del "niño" integrado al "menor" tutelado

El colapso socioeconómico del año 2002 materializó el quiebre definitivo de la matriz protectora uruguaya y desencadenó una fractura demográfica inevitable: la infantilización de la pobreza. El desplome del mercado de empleo arrojó a las nuevas generaciones hacia una zona de privación material extrema. Los registros del *Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay* documentan empíricamente esta caída, demostrando que para el año 2004 más de la mitad de los niños y niñas menores de cinco años sobrevivían por debajo de la línea de pobreza (UNICEF, 2005). Este ahogo material consolidó una segregación territorial inédita, transformando la falta de integración social en una condición crónica para las familias relegadas a las periferias urbanas.

Frente a esta emergencia demográfica, el aparato gubernamental recodificó la indigencia de fondo bajo la categoría técnica de "riesgo social" (Giorgi, 2003). Esta etiqueta legitimó la intromisión directa en la intimidad de los hogares y desencadenó una política de privatización de la culpa. El

Estado exigió a los padres, despojados previamente de su inserción laboral, asumir la responsabilidad exclusiva por la intemperie material de su entorno. La burocracia central demandó resiliencia individual, invisibilizando deliberadamente que la marginación del mercado de trabajo y la desafiliación de las redes comunitarias conforman un engranaje de violencia sistémica que excede por completo la voluntad de los sujetos. El aparato gubernamental opera así bajo una matriz que "atribuye responsabilidad individual frente al manejo de la propia vida, y esta atribución se deriva de la percepción y el tratamiento de los problemas sociales como si fuesen problemas individuales" (De Martino y Vecinday, 2011, p. 38). Esta tecnología de gobierno exculpa a la institucionalidad y fuerza a las poblaciones empobrecidas a autogestionar su propia supervivencia.

Esta orientación punitiva instituyó una profunda división biopolítica sobre las infancias uruguayas. La política pública trazó una línea divisoria tajante, construyendo la figura del "niño" escolarizado y portador de futuro, en clara contraposición con la invención del "menor". Esta última categoría fabrica un sujeto despojado de historicidad, estigmatizado y asociado ineludiblemente a la peligrosidad y el abandono (Leopold Costábile, 2002). El sistema estatal criminalizó la pobreza desde sus cimientos, fragmentando la condición infantil y delegando el tratamiento de este sector excluido a los circuitos de la vigilancia institucional y tutelar (García Méndez, 1994).

La maquinaria gubernamental contemporánea hereda y reproduce intacta esta matriz disciplinaria. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) perpetúa el paradigma higienista del antiguo Consejo del Niño de 1934, consolidando un estricto modelaje psicosocial mediante un abordaje de carácter compasivo-represivo (Leopold Costábile, 2002). Esta memoria institucional punitiva constituye la base biopolítica exacta que fundamenta la actual fiscalización a distancia del equipo ETAF en la ciudad de Treinta y Tres. La política pública prioriza el monitoreo centralizado sobre las pautas de crianza maternas y restringe la provisión de recursos habitacionales

tangibles. El Estado fuerza así al trabajador territorial a exigir normatividad en un escenario de carencia: la burocracia decreta la no institucionalización, demanda garantizar los derechos infantiles y exige responder incesantes oficios judiciales, mientras niega sistemáticamente los medios materiales para hacer posible dicha protección.

1.4. La creación del MIDES y la automatización del desamparo: el gobierno del algoritmo y el sistema de proximidad

La respuesta gubernamental frente a la fractura demográfica materializó una nueva arquitectura institucional. El Estado fundó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el año 2005 y desplegó de forma inmediata el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES). La burocracia constató el colapso del modelo tradicional basado en la pasividad administrativa. El aparato estatal abandonó la espera detrás de los mostradores para irrumpir directamente en el territorio (Cecchini y Martínez, 2011). En este nuevo escenario, la "metodología de proximidad" se instituyó como la herramienta vertebral para acercar la oferta pública a los hogares empobrecidos, transformando el espacio privado de las familias en el nuevo escenario de intervención gubernamental.

La consolidación de esta captura territorial requirió la invención de un nuevo filtro tecnocrático. Apoyada en los desarrollos sobre la medición multidimensional de la pobreza (Alkire y Foster, 2008), la burocracia central diseñó el Índice de Carencias Críticas (ICC). Este instrumento reconfiguró por completo la comprensión de la exclusión social: la pobreza abandonó su densidad biográfica para transmutar en un continuo numérico administrable. El Estado consolidó así una métrica exacta para determinar los umbrales de ingreso a la red de protección pública,

transformando el ahogo material de las poblaciones marginadas en un cálculo estadístico riguroso.

Esta intermediación tecnológica consagra una profunda fiscalización a distancia, delegando la decisión de la supervivencia familiar directamente en una plataforma informática. El algoritmo define la inclusión o la exclusión de los sectores excluidos, suprimiendo cualquier valoración humana en la asignación de los recursos tangibles. Esta automatización del desamparo queda documentada empíricamente en la confesión institucional que un jerarca gubernamental realiza frente a una mujer empobrecida reclamando su derecho a la asistencia:

> "Yo le estoy explicando cómo se conforma el algoritmo del ICC para que ingrese o no al Plan, ¿verdad? A partir de ahora que usted la notifican de que no ingresa al plan, porque es una máquina. A ver si me entiende, se entran los datos suyos a una computadora y ésta dice si su hogar va o no va, de acuerdo al Índice Crítico, después del estudio de todo lo que se le preguntó a usted con la visita [...] Yo le explico, es una máquina, ¿entiende?" (Mariatti Acosta, 2015, p. 63).

El cierre de este engranaje aterriza directamente en las viviendas de Treinta y Tres. Mientras la máquina toma las decisiones centralizadas en Montevideo, el Estado exige al operador social ingresar a los hogares para recolectar la información íntima que alimenta el software. Esta división del trabajo expande la visibilidad biopolítica del gobierno y delega la absorción de la carencia de recursos tangibles en la corporalidad de los equipos de cercanía. El técnico de proximidad encarna las tensiones de una institucionalidad que mide milimétricamente la indigencia, pero retira las respuestas materiales. Toda esta maquinaria preparó el terreno

biopolítico exacto y moldeó al "usuario gobernable" que heredaría el entramado Cercanías-ETAF.

CAPÍTULO 2: Racionalidades de gobierno, infancia y la clínica de la implicación

2.1. La matriz biopolítica y los mecanismos de gobierno: la conducción a distancia

En este mismo orden de ideas, para comprender el engranaje interno del Programa Cercanías-ETAF y los efectos materiales que produce sobre las familias de Treinta y Tres, resulta imprescindible apartarse de las concepciones clásicas que limitan el ejercicio del poder a la coacción represiva. La analítica desarrollada por Michel Foucault exige un desplazamiento epistémico: el Estado contemporáneo ejerce su poder administrando la supervivencia cotidiana de las poblaciones. Bajo este marco, la intervención social abandona su supuesta neutralidad para constituirse en un entramado político, confirmando en el territorio que "lo que es cuestionado es la forma en la que el conocimiento circula y funciona, sus relaciones con el poder" (Foucault, 1991, p. 59). Esta premisa revela cómo el saber experto se entrelaza con el control poblacional en la práctica situada.

La materialización de este proyecto político requiere de instrumentos de captura precisos. Nikolas Rose conceptualiza estos métodos operativos definiendo que «las tecnologías de gobierno son aquellas tecnologías imbuidas de aspiraciones para moldear la conducta con la esperanza de producir ciertos efectos deseados y evitar ciertos eventos indeseados» (Rose, 1999, p. 52). Las plataformas digitales (como el SIPI o el Q-Flow) y los formularios de ingreso utilizados por los equipos de cercanía conforman verdaderas maquinarias biopolíticas. Su función estratégica consiste en hacer a los sujetos legibles frente a las gerencias centrales, fragmentando la complejidad del estrangulamiento material en variables administrables, cuantificables y susceptibles de ser vigiladas.

Mediante esta fiscalización a distancia, el Estado no interviene sobre una realidad preexistente, sino que produce ontológicamente al sujeto que dice asistir. El diseño institucional codifica a las familias de manera previa a cualquier encuentro físico en los barrios, generando categorías estadísticas que atrapan a las poblaciones excluidas en una cuadrícula tecnocrática. La matriz biopolítica inventa de este modo al "sujeto clasificado", estableciendo las coordenadas exactas del desajuste institucional que asimilará el técnico de proximidad en la primera línea de intervención.

2.2. Infancia, derechos y la falsa protección: la herencia tutelar

El despliegue de este monitoreo social adquiere un cariz punitivo específico al enfocarse en las infancias y adolescencias. En las últimas décadas, el aparato gubernamental renovó su retórica oficial para alinearse con el paradigma de la protección integral, proclamando la salvaguarda irrestricta de los derechos humanos. Sin embargo, este giro discursivo encubre una matriz disciplinaria que persiste inalterada en las entrañas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La política pública sanciona garantías universales en el plano legislativo mientras, en la realidad de los barrios, convalida un vaciamiento de la asistencia, dejando al descubierto la contradicción de un Estado que norma la protección pero retrae las condiciones materiales básicas para garantizarla.

Dicha asimetría transforma el ideario de los derechos en un instrumento de supervisión. La institucionalidad demanda un apego estricto a las normas de crianza en hogares devastados por el déficit habitacional y la exclusión del mercado laboral formal, responsabilizando a las madres por las secuelas de una precariedad sistémica. El diseño de la intervención profundiza la brecha entre la formalidad de los oficios judiciales y la supervivencia cotidiana en Vergara y Charqueada, evidenciando la vigencia de una trampa narrativa:

«A pesar de esta constatable distancia entre "el derecho" y "la vida", como diría Bustelo, el enunciado del niño "sujeto de derecho" viene hegemonizando en el actual ciclo histórico las referencias a la infancia» (Leopold, 2010).

El expediente judicial plasma esta violencia epistémica. Magistrados y jerarquías departamentales instan al trabajador territorial a velar por derechos abstractos en contextos de asfixia económica. Al exigir resiliencia donde impera el desamparo, la burocracia valida un abordaje despojado de historia que termina por criminalizar la pobreza. El andamiaje estatal obliga a la dupla técnica a desempeñarse en una fractura insalvable, situando al profesional en el epicentro de la tensión entre el mandato tutelar de los escritorios y el padecimiento real de las familias excluidas.

2.3. La clínica de la implicación: el traductor del daño y el andamiaje inmaterial

La intervención territorial en Treinta y Tres no opera en el vacío, sino en el umbral exacto de las ventanillas estatales cerradas. Cuando el aparato gubernamental retira los recursos materiales, no deja la escena desierta: ubica estratégicamente al técnico de proximidad en la puerta de la vivienda. El trabajador territorial asume la función de comunicar las negativas institucionales, operando como el mensajero de un diseño tecnocrático que promete protección pero niega la cobertura material. Esta dinámica delega en la dupla de intervención la tarea directa de transmitir las "no mejores noticias" a las familias marginadas (Santiago de Zorrilla de San Martín, 2016), convirtiendo al equipo de cercanía en el amortiguador físico de la frustración comunitaria.

Frente a este vacío, las gerencias de Montevideo exigen resultados clínicos, forzando al operador a sostener psíquicamente hogares en riesgo de derrumbe (Alliaume, Macció y Osorio, 2016). Es en este punto donde la teoría se encarna en malestar: procesar esta violencia estructural desintegra el mito del técnico neutral. Cómo pude sentir en mi propia práctica, el desgaste no es un accidente,

sino la evidencia de una conexión carnal con la política pública. Gregorio Kaminsky proporciona la clave para entender esta asimilación del daño:

> «El analista institucional, como cualquier otro profesional, está implicado a través de un conjunto de relaciones o dispositivo que lo vincula estrechamente al sistema institucional que analiza e interviene. Su implicación, que es tanto económica como afectiva, epistemológica, etc. nunca puede dejar de ser ideológica» (Kaminsky, 1994, p. 12).

Desde esta perspectiva, la implicación institucional que describe el autor se manifiesta en mi propia práctica al absorber las contradicciones de un sistema que demanda protección sin recursos, evidenciando que el cuerpo del técnico es el lugar donde la ideología estatal se vuelve experiencia carnal.

Reconocer esta implicación ideológica y afectiva confirma que la maquinaria gubernamental contemporánea opera produciendo fricción constante. El equipo de cercanía comprende en su propia carne que la dependencia estatal no conforma un espacio pacífico de ayuda, sino «un espacio productivo-producto de múltiples modalidades de violencia que no son su excepción sino, antes bien, su regla» (Kaminsky, 1994, p. 17). Al constatar que su cuerpo es utilizado como escudo táctico de una política vaciada de respuestas, el trabajador territorial inicia un proceso de ruptura ética. Este quiebre prepara el escenario para el despliegue de la desobediencia metodológica, la defensa del registro cualitativo y el inminente estallido organizativo a nivel nacional.

2.4. La autoetnografía como contra-saber metodológico y la bitácora como trinchera

La consolidación de este archivo vivo exige un posicionamiento innegociable frente a los sujetos que habitan el territorio. Al documentar el daño estructural y las tácticas de supervivencia de

los hogares de Treinta y Tres, la investigación asume y despliega la "ética relacional" propuesta por Jillian Tullis (2019). Esta postura metodológica trasciende el mero formalismo académico para instituir una defensa directa de la intimidad familiar frente a la fiscalización gubernamental. Para materializar este resguardo, el relato autoetnográfico altera deliberadamente los nombres propios, desordena las coordenadas temporales y fragmenta los datos identificatorios de las poblaciones intervenidas en Vergara y Charqueada. Esta decisión metodológica garantiza que la denuncia del vaciamiento estatal y el uso de la bitácora jamás expongan a las mujeres y a los niños a nuevas formas de vigilancia punitiva o estigmatización institucional.

Frente a la asimilación corporal del daño institucional, la práctica del operador social exige una ruptura epistemológica. Cuando la política pública despliega el vaciamiento de la política social y utiliza al profesional como traductor de la carencia de recursos, la investigación tradicional resulta insuficiente para documentar la violencia del entramado. En este escenario, la autoetnografía trasciende la categoría de simple elección académica para instituirse como una metodología de supervivencia y denuncia. Este enfoque permite desmantelar la supuesta objetividad del Estado, utilizando la propia biografía del investigador y su choque en el territorio para exponer las lógicas de dominación, demostrando que «la reflexividad es uno de los procesos más desafiantes del proyecto cualitativo. No nos deja lugar para ocultarnos» (Preissle y DeMarrais, 2019, p. 90).

La materialización de este contra-saber se consolida a través de la defensa del Cuaderno de Campo (la Bitácora). El aparato gubernamental exige a la dupla de intervención ingresar datos fragmentados en plataformas informáticas diseñadas para sostener la fiscalización a distancia. Sin embargo, el ETAF de Treinta y Tres rechaza la parametrización de la vida, contraponiendo a la lógica extractiva una escritura narrativa y cualitativa que devuelve densidad a las biografías. La redacción clínica en la bitácora resguarda los tiempos orgánicos de los hogares empobrecidos de la ciudad y

frena el borramiento histórico que impone el control algorítmico. El trabajador territorial transforma el registro diario en una trinchera narrativa, protegiendo a las familias de la estigmatización estadística y documentando las vulneraciones que el Estado decide ignorar.

2.5. La agencia relacional y la potencia del colectivo

La resistencia metodológica en el interior de la vivienda constituye el primer eslabón de una transformación política más amplia. El padecimiento ético del técnico de proximidad frente a la desprotección sistémica no se resuelve en el aislamiento. La institucionalidad diseña la precarización laboral y la desconexión geográfica para fragmentar a los equipos territoriales e impedir cualquier articulación crítica. Frente a esta táctica de dispersión, la intemperie material compartida opera como el motor exacto que impulsa la reorganización de los trabajadores.

La superación de la exigencia gubernamental se materializa al comprender que la emancipación jamás constituye un atributo individual o un rasgo de resiliencia psicológica. La capacidad de disputar el diseño de la política pública requiere obligatoriamente del entramado con otros. Esta articulación demuestra empíricamente que:

> «"tener agencia" es estar en situación (relacional) de funcionar cuestionando-generando conexiones, a partir de otras conexiones» (Ema López, 2004, p. 19).

La conformación y el resurgimiento del colectivo Inter-ETAF a nivel nacional encarna directamente esta agencia relacional. Los operadores sociales entrelazan su desgaste físico y fundan una red de vigilancia epistemológica compartida. Esta fuerza instituyente interpelará directamente el monitoreo centralizado de Montevideo, transformando la tensión de los barrios en un movimiento

organizado capaz de visibilizar el seguimiento estandarizado y disputar la dirección biopolítica de la intervención.

CAPÍTULO 3: La maquinaria del programa Cercanías-ETAF: de la condicionalidad algorítmica a la vigilancia tutelar

3.1. Orígenes y diseño institucional: de la "regadera" estatal al abordaje familiar

Esta lógica institucional se traduce materialmente en el diseño del Programa Cercanías (2012), el cual buscó superar la lógica de "regadera" estatal, donde las prestaciones se dispersaban sin articulación (Cercanías, 2016). La solución fue el abordaje familiar mediante el Índice de Carencias Críticas (ICC), un mecanismo econométrico diseñado por el IECON y el MIDES que estima la probabilidad de pertenecer al primer quintil de ingresos mediante variables no monetarias (MIDES - DINEM, 2013). Este algoritmo traduce las condiciones de existencia (vivienda, educación, composición demográfica) a un puntaje entre 0 y 1, convirtiendo la exclusión en una métrica administrable que condiciona el acceso a la protección pública.

En respuesta a esta falencia, el Estado propuso posicionar al núcleo familiar en su totalidad como el centro de la política pública, instituyendo la "metodología de proximidad" para articular las respuestas de salud, educación, vivienda y empleo. Sin embargo, la definición de las familias que ingresarían a este entramado de cercanía no se estructuró a partir de una demanda espontánea ni desde la evaluación directa de los equipos situados. La captura del sujeto requirió la consolidación de un filtro estadístico previo: el Índice de Carencias Críticas (ICC). Diseñado en el año 2008 por el Instituto de Economía (IECON) de la Universidad de la República en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para la implementación del Plan de Equidad, el ICC se constituyó como un mecanismo de comprobación sustitutiva de medios de vida. La burocracia central

recurrió a la econometría para superar la medición puramente monetaria de la pobreza, estimando un modelo estadístico de tipo *probit* que predice la probabilidad de que un hogar pertenezca al primer quintil de ingresos a partir de un conjunto de variables no monetarias (MIDES - DINEM, 2013).

Este sistema consagra un escrutinio a distancia: el nivel central delega en la plataforma la facultad de determinar qué vidas son "elegibles". En consecuencia, el trabajador opera en el escenario de intervención portando un diagnóstico cuantitativo que encasilla a la familia antes de cualquier indagación cualitativa sobre sus estrategias de supervivencia.

3.2. El espejismo intersectorial y la condicionalidad de la supervivencia: la captura de la intimidad (2012-2020)

Esta matriz teórica cobra cuerpo en la cotidianeidad de Treinta y Tres a través de lo que denominamos el espejismo intersectorial. El Programa Cercanías instituyó un desembarco directo en el espacio privado de las poblaciones empobrecidas. El MIDES desplegó una promesa de abordaje intersectorial que operó, en la práctica comunitaria, como un sofisticado espejismo gubernamental. En lugar de garantizar una red robusta de protección pública, la institucionalidad central diseñó una intervención de carácter transaccional basada en la condicionalidad (Fernández, 2012). De esta forma, la política social supedita la asistencia básica a la aceptación de un monitoreo constante sobre el entorno familiar. La burocracia ató la entrega de la Asignación Familiar (AFAM) a la extracción incesante de información privada, exigiendo a las familias entregar los detalles más profundos de su cotidianidad a cambio de acceder a la alimentación básica.

El operador social ingresó a la vivienda portando planillas de evaluación, consolidando un mecanismo donde el desajuste sistémico de los hogares se transformó en la moneda de cambio exigida para habilitar la vigilancia institucional. Esta captura masiva de datos alimenta un engranaje diseñado

para asimilar el sufrimiento biográfico y convertirlo en estadística. Al observar el funcionamiento de las plataformas digitales del programa, la institucionalidad revela su verdadera función política, operando directamente como «la maquinaria productivo-distributiva y circuladora-consumidora de burocracia» (Kaminsky, 1994, p. 13).

El Estado consolida un sesgo de género, responsabilizando de manera exclusiva a las mujeres jefas de hogar por la gestión del desajuste sistémico. La propia institucionalidad confiesa el diseño de este engranaje en sus documentos de evaluación: el *Informe de la Comisión Político Técnica* del programa certifica que seis de cada diez familias atendidas a nivel nacional son monoparentales y, dentro de este universo, el 79% presenta jefatura femenina (Comisión Político Técnica, 2015, p. 5). Esta estadística no constituye una casualidad demográfica, sino la evidencia empírica de una maquinaria biopolítica que extrae la biografía de estas madres y la inyecta en los sistemas informáticos Q-Flow y SMART. Esta maniobra técnica de recolectar información en los barrios para procesarla en las oficinas de Montevideo confirma la lógica biopolítica del entramado, evidenciando que «habrá una cesura absolutamente fundamental entre el nivel pertinente para la acción económico política del gobierno, el nivel de la población, y otro nivel, el de la serie, la multiplicidad de individuos» (Foucault, 2006, p. 63). El software devora los fragmentos de vida individual para administrar a la población a distancia, moldeando el campo de acción de los sujetos antes de cualquier abordaje cualitativo.

3.3. Tecnologías de clasificación y encierro biográfico: la parametrización en los sistemas SMART y Q-Flow

La captura de la población objetivo por parte del programa Cercanías requirió la consolidación de tecnologías de medición capaces de traducir la exclusión en parámetros estandarizados. Inicialmente, el Estado recurrió al Índice de Carencias Críticas (ICC), elaborado por el Instituto de

Economía (IECON) para el Plan de Equidad como una prueba de comprobación de medios de vida. Sin embargo, la sofisticación del control biopolítico derivó en la aplicación del Índice de Vulnerabilidad Socio-Familiar (IVSF), una matriz diseñada para evaluar la intimidad del hogar mediante once dimensiones críticas: la ausencia de adultos referentes, la desvinculación del sistema educativo, la presencia de violencia intrafamiliar, la malnutrición infantil, la situación de calle, el consumo problemático de sustancias, las afecciones de salud no atendidas, la discapacidad sin cobertura, la existencia de adolescentes fuera del circuito formal educativo o laboral, el hábitat degradado o la vivienda ruinosa, y la inserción laboral precaria en la informalidad (Cercanías, 2016).

Este índice calcula un puntaje final en una escala del 1 al 7, donde el 7 representa la extrema vulnerabilidad. Esta puntuación funciona como un mecanismo de triage que define prioridades de atención, manteniendo a las familias en un limbo administrativo de espera pasiva cuando no alcanzan el puntaje máximo requerido.

Desglosar estas once áreas revela la operación del monitoreo centralizado. El IVSF no registra la historia del desajuste sistémico que atraviesa a las familias; segmenta el padecimiento cotidiano en ítems cuantificables que le permiten al nivel central organizar colas de espera y clasificar el riesgo poblacional. El sistema codifica al sujeto antes del primer encuentro físico, forzando al trabajador a ingresar al hogar portando un diagnóstico prediseñado que encasilla las trayectorias vitales.

La consolidación de métricas como el IVSF instituye una tecnología biopolítica diseñada para administrar la escasez. Cuando un núcleo de convivencia padece un desajuste sistémico sostenido, pero no alcanza el puntaje matemático exacto exigido por Montevideo o encuentra los cupos saturados, el sistema informático no rechaza la asistencia de forma explícita. El aparato gubernamental inscribe a las familias en una "cola de prioridades", instaurando un limbo burocrático que pacifica a la población

marginada al generar la expectativa de un trámite en curso. Esta maniobra supedita la urgencia vital de los sujetos empobrecidos a la conveniencia presupuestal del nivel central, suspendiendo de forma indefinida el tiempo de la reparación material. La propia burocracia confiesa el colapso deliberado de este engranaje de contención, reconociendo en sus evaluaciones oficiales que «el nudo es la lista de espera. Las que faltan están igual y peor que las que entraron. No hay respuestas para esto» (Fernández, 2012, p. 22)

La consolidación de este control poblacional requirió la instrumentación del sistema SMART (Sistema de Monitoreo y Administración de Resolución de Trámites). Esta plataforma estableció un panóptico tecnológico operado desde las oficinas centrales. El software cruza bases de datos a nivel nacional para rastrear los ingresos formales, las prestaciones cobradas y el historial de cada núcleo. Esta herramienta transforma a la familia en un archivo transparente y constantemente vigilado, instaurando un monitoreo sobre el espacio privado sin requerir presencia física en el escenario de intervención.

El registro informático cotidiano ejerce una violencia epistemológica directa a través de la plataforma Q-Flow. El software impone una estructura temporal rígida que choca frontalmente con los ritmos orgánicos de las crisis familiares. El sistema fuerza al trabajador de proximidad a encajar realidades complejas (como el consumo problemático o el déficit habitacional) en menús desplegables y variables binarias de "Falso" o "Verdadero" (MIDES, 2013). Esta parametrización genera una ceguera biográfica importante, mutilando la densidad del entorno.

Encasillar a las familias empobrecidas en estas plataformas tecnológicas preconfigura sus identidades y funciona como una tecnología de captura. El uso de estos registros digitales demuestra empíricamente cómo el algoritmo actúa sobre la existencia humana:

> «Es un dispositivo de objetivación, que identifica y clasifica prácticas, y las traduce en poblaciones focalizadas, de tal manera que estas últimas se vuelvan inteligibles y puedan ser conducidas en función de determinados fines» (Fagundez-D'Anello y González-García, 2018, p. 1007).

La máquina fábrica al sujeto clasificable para sostener el escrutinio, suprimiendo la historia viva que acontece en el escenario de intervención.

3.4. El repliegue hacia el INAU y el giro tutelar: el monitoreo del SIPI y la psicologización de la miseria (2021)

La ruptura del convenio interinstitucional en el año 2021 marcó un viraje sustancial en la racionalidad del Programa Cercanías. Bajo la órbita original del Ministerio de Desarrollo Social, el Estado pretendió conducir los comportamientos familiares articulando la promesa de un "fortalecimiento de capacidades" con la articulación a programas, la entrega de transferencias monetarias condicionadas y la trazabilidad algorítmica de los sistemas Q-Flow y SMART.

Con la centralización de la gestión en el INAU operó un repliegue biopolítico: ante el retraimiento del acceso, el vaciamiento de las prestaciones tangibles y el estancamiento de recursos en el territorio, la intervención abandonó la retórica del acompañamiento integral para centrarse en el monitoreo de la patria potestad. Este desplazamiento tecnológico reconfiguró al sujeto intervenido. Al adoptar el Sistema de Información para la Infancia (SIPI) como plataforma predominante de registro, el dispositivo restringió su lente a la detección de la falta materna y a la acumulación de datos para los expedientes judiciales, consolidando una estrategia para «"psicologizar" los problemas sociales de raigambre sistémica, política y económica,

individualizando o familiarizando la responsabilidad por las carencias o problemáticas sociales vividas» (Claramunt, 2010, p. 57).

Como analiza Jacques Donzelot (2008), la política social contemporánea reactiva una verdadera «policía de las familias» (p. 90), donde el aparato estatal ya no busca compensar la desprotección estructural mediante la distribución de bienes públicos, sino tutelarizar a los hogares empobrecidos. Esta dinámica transforma la vivienda en un territorio de sospecha continua, evaluando el cumplimiento de los deberes parentales frente a la intemperie material. En este esquema, el software impone leer las biografías mediante categorías preconcebidas, donde «los datos duplicados fragmentados tienden a tener más credibilidad que la propia persona» y que el equipo de cercanía que interviene directamente en el territorio (Arana Medeiros, 2019, pp. 43-44). Esta despersonalización supedita la asignación de prestaciones a la cuantificación de la vulnerabilidad, reduciendo la complejidad del núcleo de convivencia a parámetros informáticos homogéneos.

Finalmente, esta deshistorización se consolida en las exigencias procedimentales: los juzgados y las jerarquías departamentales imponen al trabajador de proximidad acortar la extensión de los informes sociales, limitando la escritura al brevísimo casillero del "En suma". Esta síntesis administrativa elimina la memoria viva de las familias, transformando trayectorias complejas en casos instantáneos de riesgo y consumando un mecanismo exacto de borramiento biográfico.

3.5. La estandarización cromática frente a la trinchera narrativa: el Semáforo DRIVE y la resistencia del Cuaderno de Campo

La pretensión de parametrizar las trayectorias de las familias alcanzó una nueva frontera a mediados del año 2025 con la implementación de la Ficha de Registro Mensual en la nube virtual (DRIVE), impulsada por la Dirección del Programa Cercanías. Ante la ausencia de pautas metodológicas tras la finalización del convenio interinstitucional con el MIDES, la administración intentó sustituir el acompañamiento en el escenario de intervención por el monitoreo centralizado a distancia. La directriz orientó a los equipos nacionales a clasificar mensualmente la evolución de los hogares asignando un código cromático (verde para derechos garantizados, amarillo para alertas o procesos, y rojo para vulneraciones persistentes) sobre siete ejes predeterminados: salud, educación, hábitat digno, trabajo y protección social, vivir en familia, identidad, y recreación y cultura.

Esta cuadrícula digital no solo buscó organizar la información, sino que operó como una potente tecnología de deshistorización: al imponer etiquetas de “verde”, “amarillo” o “rojo”, el dispositivo mutila la densidad biográfica y reduce padecimientos estructurales (como la carencia habitacional o la inseguridad alimentaria) a una categoría administrativa de riesgo. Esta operación técnica no es un hecho aislado; por el contrario, se alinea de forma precisa con la lógica del “En suma” judicial descrita anteriormente. Ambas instancias convergen en un objetivo político: eliminar la memoria viva del sujeto intervenido para presentar a los decisores institucionales una imagen instantánea, estática y, sobre todo, fácil de gestionar, consolidando así un mecanismo eficaz de borramiento biográfico.

Frente a este mandato de estandarización, la respuesta del equipo territorial en Treinta y Tres se articuló no como un retraimiento, sino como una subversión metodológica. Lejos de abandonar la

plataforma institucional, el equipo se apropió del entorno virtual para instituir el Cuaderno de Campo como una trinchera narrativa inexpugnable. Esta herramienta no surge como una evasión burocrática, sino como un acto de agencia relacional: una traducción de la complejidad familiar que el algoritmo desestima. Al desplazar el registro desde la casilla cromática rígida hacia una narrativa cualitativa compartida en la misma nube, el equipo convierte el espacio digital de control en un archivo vivo. Mediante esta bitácora, el equipo reivindica la legitimidad de su mirada, contraponiendo sus propios ejes de análisis (ocho en total, superando la limitación paramétrica del Semáforo) para restituir la historicidad y la densidad relacional que la lógica del color amenaza con borrar.

Para materializar este resguardo de la memoria y contraponerlo a la fragmentación reduccionista del Semáforo DRIVE (limitado a siete parámetros estandarizados), el equipo de Treinta y Tres diseñó una arquitectura de registro propia. Esta bitácora no busca clasificar ni parametrizar, sino capturar la complejidad de las trayectorias vitales mediante una estructura flexible y co-creada por la dupla territorial, organizada bajo ocho ejes vertebrales que restituyen la densidad narrativa: 1) **Núcleo familiar**, para el registro de datos básicos; 2) **Objetivo**, que define la finalidad de cada intervención; 3) **Seguimiento**, un historial cronológico de acciones y coordinaciones; 4) **Observaciones**, para anotaciones cualitativas sobre dinámicas vinculares, salud mental y condiciones del entorno; 5) **Estrategias**, centradas en enfoques metodológicos para abordar la complejidad; 6) **Líneas de trabajo**, ejes prioritarios a mediano y largo plazo; 7) **Pendientes**, que gestiona la inmediatez administrativa; y 8) **Acuerdos**, que asienta los compromisos pactados respetando los tiempos orgánicos de las familias, desprendiéndose de la rigidez de los plazos burocráticos.

La consolidación de este archivo político exige una decisión ética innegociable sobre la temporalidad del registro. Frente a la exigencia del algoritmo de una extracción de datos en tiempo real (que suele violentar la intimidad del hogar y convertir al técnico en un auditor dentro de la vivienda),

el equipo de Treinta y Tres opta por el registro diferido. El trabajador territorial retiene la información de forma orgánica durante el encuentro y plasma la biografía en la bitácora una vez fuera del espacio doméstico. Esta decisión metodológica no es una cuestión técnica menor; es una postura política que frena la violencia de la extracción inmediata, protege el vínculo de confianza frente a la fiscalización centralizada y garantiza que la escritura sea un acto de reflexión y no de vigilancia. Redactar la cotidianidad bajo esta matriz de respeto por los tiempos orgánicos constituye, en definitiva, un acto de justicia epistémica que desactiva el control algorítmico y devuelve la dignidad narrativa al espacio de la vivienda.

A su vez, esta arquitectura narrativa es flexible y co-creada por las duplas de trabajo, garantizando el relevo histórico y resguardando la memoria viva frente a la alta rotación y la inestabilidad de los contratos laborales de los operadores sociales. Al heredar el relato cualitativo de la dupla anterior, el nuevo técnico asegura la continuidad del acompañamiento y evita someter a los integrantes del núcleo familiar a nuevos interrogatorios revictimizantes, resguardando la integridad de su biografía. El uso estratégico de este soporte digital documenta las tácticas de supervivencia y demuestra empíricamente que «muchos géneros de escritura no solamente informan o transmiten conocimiento, sino que, en la cualidad intrínseca del gesto creativo, lo producen» (Tanis, 2018, p. 88). Escribir y describir el encuentro desde esta matriz clínica frena la violencia epistémica del Estado, restituye la legitimidad política de la intervención y blinda la agencia relacional frente a cualquier intento de automatización del desamparo.

CAPÍTULO 4. El ejercicio territorial en Treinta y Tres: autoetnografía, implicación y la fuga del colectivo Inter-ETAF

4.1. El antagonismo geográfico y el resguardo narrativo: la oralidad en la intemperie

La implementación de la política pública en el departamento de Treinta y Tres instituye una configuración espacial que exacerba el vaciamiento de la política asistencial. El nivel central prescribe que la dupla de intervención radique su base operativa en la capital departamental, aunque simultáneamente demanda el abordaje de núcleos familiares en el interior profundo, específicamente en las localidades de Vergara y Charqueada. Este diseño gubernamental impele al trabajador territorial a recorrer trayectos extensos para suplir la ausencia de la red estatal. Al arribar a estas comunidades, el equipo constata una carencia crítica de recursos tangibles: la desprotección sistémica cristaliza en policlínicas carentes de especialistas y en la inexistencia de dispositivos de salud mental comunitaria.

La dimensión física de este trayecto vulnera al operador social mediante un riesgo directo. Con el fin de optimizar los recursos financieros del programa, el equipo procuraba concentrar el abordaje de ambas localidades en una sola jornada, distribuyendo el tiempo entre dos familias en Charqueada y siete en Vergara. Este esquema operativo requería emplear una camioneta arrendada y transitar por el "camino del medio", una ruta vecinal severamente degradada por la circulación de maquinaria agrícola pesada.

La brecha entre el diseño tecnocrático de Montevideo y el territorio afloró crudamente cuando la dupla enfrentó la anegación del camino. Ante un tramo completamente inundado, el equipo halló una disyuntiva que el seguimiento estandarizado ignora: retroceder más de sesenta kilómetros hasta el empalme de la ruta principal, malogrando la jornada, o vadear el agua a ciegas para economizar los costos del vehículo y cumplir con las visitas pautadas. La dupla resolvió atravesar la inundación,

asumiendo el peligro en su propia carne y ratificando que el Estado delega la precariedad operativa en el trabajador precarizado.

Fue precisamente en este tránsito hostil donde germinó el blindaje metodológico del equipo. Para salvaguardar la memoria de la intervención y eludir la violencia de la extracción de datos en vivo frente a las familias, el operador social instituyó la cabina de la camioneta como su espacio de resguardo. El registro cualitativo comenzó a producirse mediante audios intercambiados entre los técnicos mientras abandonaban Charqueada o circulaban entre las viviendas de Vergara. Grabar en la ruta y transcribir a posteriori mitiga la vigilancia burocrática en tiempo real y restituye la dimensión ética del encuentro, protegiendo la privacidad del hogar.

Esta vivencia permite comprender cómo esta táctica de supervivencia nutre el Cuaderno de Campo (la bitácora digital en Drive), transmutando la tecnología de registro en una trinchera narrativa. Rechazar las celdas cerradas del Semáforo DRIVE a favor del apunte cualitativo constituye un acto de justicia epistémica. La redacción de estas experiencias en la plataforma alternativa trasciende la mera recolección de datos exigida por el monitoreo centralizado. El trabajador territorial genera, mediante sus audios y sus textos, una realidad que el Estado se niega a codificar.

Al reflexionar sobre este evento, resulta evidente que esta orfandad material me obligó a adoptar un posicionamiento epistemológico. La escritura en primera persona permitió consignar la colisión que el algoritmo omite. Mi propia corporalidad abandonó la supuesta neutralidad para erigirse en un archivo vivo, asumiendo la autoetnografía como «un acercamiento a la investigación y a la escritura, que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para entender la experiencia cultural» (Ellis et al., 2019, p. 18).

4.2. La externalización del riesgo y la corporalidad como baluarte: el Estado extorsionador

La intervención en Treinta y Tres revela una contradicción central que atraviesa la política asistencial contemporánea: se traslada a los sujetos la responsabilidad de resolver situaciones ante las cuales el Estado ha retirado todo soporte material. Como señalan González Laurino y Leopold Costábile (2014), en este escenario «se les pide mucho a los que tienen poco y a menudo más que a los que tienen mucho, atribuyéndoles la responsabilidad de salir de la situación en que se encuentran» (p. 207). Esta extorsión cotidiana se traduce en que la burocracia estatal demanda contener emergencias de riesgo vital sin proveer instrumentos tangibles, derivando la gestión del conflicto a la corporalidad del trabajador. El Cuaderno de Campo consigna esta dinámica con precisión. En la localidad de Charqueada, un núcleo integrado por dos jóvenes y su hija recién nacida habitaba un rancho precario con peligro inminente de derrumbe ante un temporal. El mandato del INAU prescribía el desalojo inmediato, omitiendo la provisión de una solución habitacional efectiva.

La desprotección sistémica se manifestó en la negociación con la alcaldía local. Pese a contar con un recinto para evacuados, las autoridades rehusaron ofrecerlo proactivamente, presumiendo un rechazo familiar por tensiones previas. La dupla de intervención absorbió la frustración, viéndose compelida a sostener una interlocución políticamente correcta para instar a la alcaldía a formalizar la invitación. El dispositivo gubernamental instrumentalizó al técnico de proximidad como escudo, forzándolo a exigir el abandono del domicilio bajo la amenaza implícita de gestionar el amparo de la lactante en el sistema de internación del INAU. El Estado utilizó la protección infantil como mecanismo de extorsión, descargando en la dupla la carga moral de fragmentar un hogar sin brindar cimientos materiales para su reconstrucción.

Esta delegación de la violencia escala hasta comprometer la integridad física del equipo. La bitácora registra la intervención con un adolescente vinculado a redes de narcotráfico locales. Durante la visita, el joven relató su participación en actividades delictivas. Al abandonar la vivienda, el equipo experimentó un temor directo en el territorio. Tras la caída de la co-gestión con el MIDES, la supervisión retiró su firma directa de los informes judiciales, obligando al operador a quedar expuestos individualmente en los escritos de amparo. La burocracia expone la identidad del trabajador ante la criminalidad, explotando su compromiso ético y ratificando que «la palabra "compromiso" convoca al trabajador más allá de un vínculo laboral. [...] Este “compromiso” desafía moralmente al trabajador que debe realizar tareas más allá de su preparación» (Mariatti, 2015, p. 65).

La desconexión entre el mandato burocrático y la experiencia en el territorio se tornó insostenible en el centro de salud departamental. Tras una audiencia judicial donde se solicitó el amparo para dos hermanos, la dirección del INAU nos exigió acompañarlos a la revisión médica (protocolo previo al ingreso al sistema de protección integral) argumentando una carencia de personal. La dirección del programa Cercanías avaló esta exigencia bajo una premisa falaz: sostuvo que la dupla técnica debía realizar el acompañamiento para "disminuir el impacto", asumiendo la existencia de un vínculo afectivo sólido que, en la realidad de una intervención iniciada hacía apenas un año y atravesada por las restricciones de la pandemia, era inexistente. En ese contexto, la supuesta "proximidad" fue instrumentalizada como una herramienta de contención administrativa. Durante la revisión, uno de los niños sufrió una crisis emocional y huyó hacia el perímetro exterior; intentó escalar un muro con maderas y clavos expuestos mientras se golpeaba repetidamente. En ese instante, el discurso técnico sobre la contención psicológica perdió toda operatividad. La intervención transmutó en un esfuerzo físico extenuante donde los técnicos debimos emplear nuestra propia fuerza para sujetar al niño y retirar los objetos punzantes. Lo que en ese momento sentí como una urgencia

física, hoy se analiza como una tensión muscular acumulada que no constituye un relato anecdótico; representa la prueba empírica de una política pública que pretende administrar el trauma sistémico mediante expedientes, forzando al trabajador a asimilar la crisis en su propia carne.

4.3. El boicot táctico en el espacio doméstico: la agencia frente al monitoreo centralizado

El diseño de la política social presupone habitualmente que las poblaciones empobrecidas son sujetos pasivos, parametrizables mediante índices de vulnerabilidad que ignoran sus trayectorias reales. No obstante, la inmersión autoetnográfica revela que los núcleos familiares no solo leen con agudeza las deficiencias del dispositivo, sino que despliegan tácticas de elusión y reapropiación que el Estado califica erróneamente como "incumplimientos". Lo que la burocracia lee como una falla conductual constituye, en la realidad territorial, una sofisticada táctica de supervivencia.

El Cuaderno de Campo registra con precisión clínica estas dinámicas. En la localidad de Vergara, una referente víctima de violencia doméstica inició gestiones para acceder a un subsidio de alquiler. La herramienta diseñada desde el nivel central chocó de inmediato con un mercado inmobiliario local acotado, barreras burocráticas y con la escasez de fincas habilitadas en el sistema. Ante el estancamiento, la institucionalidad ofreció una solución que, bajo la lógica centralizada de Montevideo, parecía viable pero que en el territorio resultó violenta: el traslado de la referente a la ciudad de Treinta y Tres para "efectivizar el recurso".

En esta escena emergió una doble tensión. La mirada autoetnográfica permite develar que el equipo interviniente, atravesado por un deseo de protección, proyectó inicialmente que la mudanza otorgaría a la mujer un horizonte de mayores oportunidades. Sin embargo, esta expectativa técnica invisibilizó que el traslado implicaba la separación de sus redes comunitarias y familiares que sostenían el cuidado diario de sus hijos y su propia red de subsistencia. La clínica de la implicación

habilitó un quiebre reflexivo: al reconocer que nuestro impulso de salvación encubría una forma de violencia tutelar, le explicitamos una postura ética de neutralidad no juzgadora. Al verse liberada de nuestra coacción profesional y de la expectativa estatal, la referente ejercitó su agencia: rechazó formalmente el subsidio, aseguró una vivienda prestada por un familiar en su misma localidad y priorizó la densidad de sus lazos locales sobre una prestación que exigía el desarraigo geográfico.

Esta resistencia micropolítica opera con idéntica agudeza sobre la provisión de insumos materiales. La bitácora documenta cómo el Estado entrega recursos rígidos (como la compra de chapas para la reparación de un techo o la entrega de una canasta alimenticia) dificultando la transferencia de presupuestos para el pago de mano de obra para su colocación o el pago de servicios). Cuando las familias reciben estos insumos, la rigidez de la prestación colisiona con urgencias vitales que las plataformas informáticas no registran. Ante la imposibilidad de costear un albañil o la inminencia de un corte de luz, las familias comercializan los materiales. Lejos de constituir un fraude, estas acciones representan un sabotaje táctico y una reapropiación económica consciente: los sujetos transmutan la asistencia rígida del Estado en liquidez financiera flexible para resolver emergencias inmediatas.

La inmersión en el territorio demuestra que las familias no son recipientes pasivos del diseño gubernamental; reinterpretan los recursos públicos y desvían sus flujos para garantizar la supervivencia, confirmando que «podemos entender la agencia como algo que está/es en el (inter)medio, en medio de los flujos de acciones. Algo que desvía, traduce y conecta prácticas» (Ema López, 2004, p. 16).

4.4. La cancelación del encuentro y la fuga instituyente: el contra-saber del colectivo Inter-ETAF

La desmaterialización de la política social afectó drásticamente las condiciones laborales de los equipos. Durante el año 2025, tras la implementación del Semáforo DRIVE, la Dirección del Programa Cercanías suspendió las instancias presenciales anuales que históricamente congregaban a los equipos ETAF en Montevideo para formación e intercambio. La institucionalidad reemplazó el espacio de reflexión colectiva por comunicados electrónicos masivos.

Por correo electrónico en noviembre de 2025, la administración notificó la cancelación del Encuentro Nacional e informó la transferencia del Programa Cercanías a la órbita de Familias y Cuidados Parentales del INAU. En abril de 2026, un nuevo mensaje confirmó el cese de la Directora para asumir la Dirección de Adopciones. Estos movimientos se desplegaron sin nuevos Términos de Referencia ni coordenadas metodológicas, confinando a los equipos a seguir operando bajo la incertidumbre mientras la intemperie en los barrios se sigue agudizando.

Frente a la estrategia estatal de aislar a los equipos ETAF a nivel nacional para obturar el procesamiento político de la intemperie material, los técnicos sociales articularon una potente respuesta organizativa. Los equipos de cercanía se congregaron en el colectivo Inter-ETAF a escala nacional, subvirtiendo y apropiándose de las mismas plataformas de comunicación empleadas para el seguimiento estandarizado y el monitoreo centralizado. La agrupación diseñó un relevamiento mediante formularios digitales para sistematizar la precariedad de las condiciones de contratación, la desprotección estructural y las situaciones de violencia que la primera línea de fuego asimila cotidianamente.

Mediante este movimiento instituyente, el trabajador territorial abandonó la posición de mero ejecutor de directrices para erigirse en un sujeto político colectivo capaz de interpelar a las gerencias de Montevideo. El Inter-ETAF construyó un contra-saber empírico cimentado en la práctica situada, utilizando sus propios diagnósticos territoriales para disputar la orientación biopolítica de la política pública directamente ante el Directorio del INAU. Esta articulación colectiva demostró que, frente al intento institucional de privatizar la culpa e individualizar el malestar, «actuar es hacer con otras, la acción no es un producto individual y la agencia -como capacidad-posibilidad- es también compartida» (Ema López, 2004, p. 17)

Conclusiones

La presente investigación permite desmantelar la pretendida neutralidad de las tecnologías de gobierno en la política social uruguaya, revelando que la precariedad no es un accidente técnico, sino un resultado deliberado de una matriz que prioriza la gestión del riesgo sobre la garantía de derechos. Las plataformas informáticas analizadas no actúan como meros registros administrativos, sino como dispositivos de una operación ontológica: al parametrizar la vida para hacerla "legible" a los ojos del Estado, la burocracia despoja a los sujetos de su historia y los transforma en "sujetos clasificados", estandarizados para la fiscalización. Sin embargo, este encierro biográfico es permanentemente desbordado. El abismo entre la retórica oficial de protección y la realidad material del territorio expone una desmaterialización de la asistencia que, al delegar el riesgo en la corporalidad del trabajador y en la resiliencia de las familias, revela que el algoritmo nunca alcanza a cubrir la totalidad de la vida.

En este punto reside la potencia de la Agencia Relacional: no como una mera resistencia reactiva, sino como la prueba empírica de que el control estatal siempre será incompleto. Allí donde el dispositivo de gobierno intenta reducir la complejidad a una casilla cromática, los trabajadores

territoriales y las familias despliegan "trincheras narrativas" y reapropiaciones tácticas que restituyen la densidad humana. Esta agencia es el resto insuperable, el dato que el sistema no puede capturar y que demuestra, en última instancia, que la parametrización es una ficción incapaz de contener la potencia de lo real.

La respuesta a esta violencia sistémica encuentra su cristalización política en la consolidación del colectivo Inter-ETAF, un proceso de "fuga instituyente" que se apropia de las mismas herramientas de registro estatal para construir un contra-saber empírico. Al transformar la fricción de los barrios en una fuerza colectiva organizada, los equipos territoriales no solo han visibilizado el monitoreo centralizado, sino que han disputado la dirección biopolítica de la intervención. En las grietas de este dispositivo gubernamental, la agencia compartida ratifica que, tal como señala Ema López, actuar es cuestionar las conexiones dadas para fundar, en la precariedad misma, una nueva regla de lo posible; una donde la práctica situada, lejos de ser un eslabón administrativo, se erige como el baluarte último de la dignidad narrativa y el motor indispensable para desbordar las grietas del control algorítmico.

Bibliografía:

- Alkire, S., y Foster, J. (2008). Counting and multidimensional poverty measurement (Ophi Working Paper 7). Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- Alliaume, I., Macció, L., y Osorio, V. (2016). Pasos y huellas del Programa Cercanías en el Oeste Costero. Reflexiones e interrogantes. En Trabajo Social: debatas y perspectivas (pp. 105-125). Departamento de Trabajo Social, FCS-UdelaR.
- Antía, F., Castillo, M., Fuentes, G., y Midaglia, C. (2013). La renovación del sistema de protección uruguayo: El desafío de superar la dualización. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 22(2), 171-194.
- Arana Medeiros, A. (2019). [Sistema de Información para la infancia en el nuevo perfil de Centro Juvenil: de tecnología de información a mecanismo de focalización] [Tesis de Licenciatura en Trabajo Social]. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- Bell Lara, J., y López, D. L. (2002). La cosecha del neoliberalismo en América Latina. Semantic Scholar, 1-25.
- Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social: Una crónica del salariado. Paidós.
- Cecchini, S., y Martínez, R. (2011). Protección social inclusiva en América Latina: una mirada integral, un enfoque de derechos. Libros de la CEPAL.

- Claramunt, A. (2010). Los programas sociales focalizados y centrados en el abordaje de los aspectos subjetivos: contribuciones y límites en la efectivización de los Derechos Humanos. Revista Fronteras, (6), 47-59.
- Comisión de Proximidad. (2016). Modelo de Atención: Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares (Cercanías). Ministerio de Desarrollo Social; Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
- Comisión Político Técnica [CPT]. (2015). Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares – Cercanías. Informe de la Comisión Político Técnica. Ministerio de Desarrollo Social.
- De Martino, M., y Vecinday, L. (2011). Notas sobre nuevas formas de gestión de la pobreza: individualización, informatización y responsabilidad familiar de los problemas sociales. Revista Fronteras, (6), 31-45. Departamento de Trabajo Social, Universidad de la República.
- Donzelot, J. (2008). La policía de las familias: Familia, sociedad y poder. Ediciones Nueva Visión. (Obra original publicada en 1977).
- Ellis, C., Adams, T. E., y Bochner, A. P. (2019). Autoetnografía: un panorama. En S. M. Bénard Calva (Comp.), Autoetnografía. Una metodología cualitativa (pp. 17-41). Universidad Autónoma de Aguascalientes; El Colegio de San Luis.
- Ema López, J. E. (2004). Del sujeto a la agencia (a través de lo político). Athenea Digital, (6), 1-24.
- Fagundez-D'Anello, D., y González-García, D. (2018). Definir para gobernar: políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Uruguay. (Sistematización de investigación/Artículo).

- Fernández, J. (2012). Bases para el Diseño de una Estrategia de Intervención Integral con Familias en situación de vulnerabilidad. Consultoría BID-MIDES.
- Filgueira, F. (1998). El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada. En B. Roberts (Ed.), Ciudadanía y política social latinoamericana. FLACSO/SSRC.
- Filgueira, F. (2013). Los regímenes de bienestar en el ocaso de la modernización conservadora: Posibilidades y límites de la ciudadanía social en América Latina. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 22(2), 17-46.
- Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977-1978) (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (1991). El sujeto y el poder. Carpe Diem Ediciones.
- García Méndez, E. (1994). Derecho de la infancia-Adolescencia en América Latina: de la Situación Irregular a la Protección Integral. Ediciones Forum Pacis.
- Giorgi, V. (2003). Niñez, subjetividad y políticas sociales en América Latina. Una perspectiva desde la psicología comunitaria. [Conferencia]. 29 Congreso Interamericano de Psicología-SIP, Lima, Perú.
- González Laurino, C., y Leopold Costábile, S. (2014). Análisis del diseño y la implementación de la política asistencial en Uruguay a comienzos del siglo XXI. Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social, (54), 190-210.
- Grassi, E. (2003). Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I). Espacio Editorial.
- Hacking, I. (1995). The looping effects of human kinds. En D. Sperber, D. Premack y A. J. Premack (Eds.), Causal cognition: A multi-disciplinary debate (pp. 351-383). Clarendon Press.

- Kaminsky, G. (1994). Dispositivos institucionales. Lugar Editorial.
- Leopold Costábile, S. (2002). Tratos y destratos: Políticas públicas de atención a la infancia en el Uruguay (1934-1973) [Tesis de maestría, Universidade Federal do Rio de Janeiro / Universidad de la República].
- Leopold, S. (2010). Aproximaciones al estudio de las políticas de infancia en el Uruguay. (Documento/Sistematización).
- Lorey, I. (2016). Estado de inseguridad: Gobernar la precariedad (R. Sánchez Cedillo, Trad.). Traficantes de Sueños. (Obra original publicada en 2012).
- Mariatti Acosta, A. G. (2015). La política activa de despolitización creciente. Un estudio concreto de los programas de transferencia de renta condicionada del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay. Revista Fronteras, (8), 59-73.
- Midaglia, C. (2000). Alternativas de protección a la infancia carenciada. La peculiar convivencia de lo público y lo privado en el Uruguay. Colección Becas de Investigación. CLACSO.
- Midaglia, C. (2009). Entre la tradición, la modernización ingenua y los intentos de refundar la casa: la reforma social en el Uruguay de las últimas tres décadas. Buenos Aires: CLACSO.
- Ministerio de Desarrollo Social [MIDES]. (2013). Manual del Asistente de Campo. PC Magallanes. Sistema Q-Flow. Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM).
- Ministerio de Desarrollo Social, Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo. (2013). Sistema Integrado de Información del Área Social (SIIAS) y evaluación de programas de cercanía territorial. MIDES-DINEM.
- Preissle, J., y DeMarrais, K. (2019). Enseñar la reflexividad en la investigación cualitativa. Acoger un estilo de vida de investigación. En S. M. Bénard Calva (Comp.), Autoetnografía.

Una metodología cualitativa (pp. 83-105). Universidad Autónoma de Aguascalientes; El Colegio de San Luis.

- Rose, N. (1999). Powers of freedom: Reframing political thought. Cambridge University Press.
- Santiago de Zorrilla de San Martín, M. (2016). Peleando la Integración [Tesis de grado no publicada]. Universidad de la República.
- Tanis, B. (2018). La escritura, el relato clínico. Revista Uruguaya de Psicoanálisis, (126), 71-88.
- Tullis, J. (2019). Yo y los otros. La ética en la investigación autoetnográfica. En S. M. Bénard Calva (Comp.), Autoetnografía. Una metodología cualitativa (pp. 155-181). Universidad Autónoma de Aguascalientes; El Colegio de San Luis.
- UNICEF. (2005). Observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia en Uruguay. 2005. UNICEF Uruguay.